

Las grandes patronales y el control de la *clase política* chilena.

No debe extrañar la pelea a gritos que hoy exhibe la Derecha política *tradicional*. Pueden hacerlo ya que actualmente no tienen un enemigo real que amenace sus **intereses de clase y su régimen económico**, que les fuerce a cerrar filas, como en otra circunstancia ocurriría. Es que, por muy peleados que estuviésemos con nuestros familiares o vecinos, de acaecer una amenaza común dejaríamos a un lado los desencuentros cerrando filas para enfrentarla.

Puede darse el lujo de pelear porque sus controladores reales (las grandes fortunas, el capital transnacional y el imperialismo), están confiados y tranquilos. Los intereses de estos sectores, que hasta hace algunos años la Derecha política *tradicional* representaba de modo único o exclusivo, continúan estando a salvo, aunque tal Derecha no controle ni el aparato Ejecutivo (Gobierno) ni el legislativo (Parlamento).

Es que las grandes fortunas y el Imperio también influyen en el otro conglomerado; porque sus enormes aportes (sustraídos de la labor de sus trabajadores), nunca han sido “*gratuitos*”. Y se nota -y se seguirá notando- en el modo y en la dirección en que gobiernan y legislan.

A continuación, los reportajes de CIPER CHILE, de 6 y 18 de noviembre de 2013.

Los secretos de las empresas que financian la política: Quiénes son y cuánto gastan.

Por [Francisca Skoknic, Francisca Miranda y Gustavo Villarrubia](#) en Reportajes de investigación publicado el 6 de noviembre de 2013.



Las donaciones para financiar las campañas políticas se cuentan en millones de dólares entre los grandes conglomerados como Enersis. Aunque la ley que regula el financiamiento de las campañas les permite el anonimato, CIPER rastreó los directorios de los grandes grupos económicos y encontró donaciones de las empresas ligadas a las familias Matte, Luksic, Del Río, Cúneo-Solari, Angelini y Yarur. Todos quieren influir en las decisiones políticas y para ello suelen dividir sus aportes entre distintas empresas, evadiendo los topes legales.



Jorge Rosenblut

El pasado 30 de agosto, el directorio de **Endesa Chile** se reunió para resolver un asunto importante. Las cámaras de video se encendieron en Madrid y Mallorca para conectarse en una videoconferencia con la sesión que presidía en Santiago Jorge Rosenblut y a la que asistieron, entre otros directores, Vittorio Corbo y Felipe Lamarca. Se tomaron sólo dos acuerdos. El primero, fue donar de manera reservada **un millón de dólares** –equivalentes a \$509.750.000, según consta en el acta ([ver documento](#))–, para financiar campañas políticas en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, así como también en las elecciones de senadores y diputados que tendrán lugar el próximo 17 de noviembre. El segundo acuerdo fue mandar a Jorge Rosenblut para distribuir el millón de dólares según los lineamientos dados por el mismo directorio. Rosenblut conoce bien este mundo, pues fue uno de los recaudadores de la campaña de Michelle Bachelet en 2004, cuando debutó la nueva ley de financiamiento y gasto electoral.

Enersis –grupo controlado por Endesa España, que a su vez es controlada por la italiana Enel– siguió los pasos de su filial Endesa Chile y a comienzos de septiembre acordó donar **US\$ 2,5 millones** –equivalentes a \$1.274 millones– con el mismo fin ([ver documento](#)). A esta decisión concurrieron algunos directores que son figuras públicas, partiendo por el presidente del holding y también de la Bolsa de Comercio, Pablo Yrarrázaval, el ex presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, y el presidente de Larraín Vial, Leonidas Vial, recientemente cuestionado por su rol en el caso Cascadas.



Pablo Yrarrázaval

El acta de dicha sesión menciona que parte de ese dinero puede ser donado a través de algunas de sus filiales, pero no precisa si Endesa está entre ellas. Si se trata de decisiones autónomas, los aportes a campañas políticas de Endesa y Enersis sumarían **US\$ 3,5 millones**, lo que equivale a una décima parte de lo donado a todos los candidatos del país en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias (\$19 mil millones). Por eso, no es aventurado pensar que puede tratarse de una de las donaciones políticas más importantes –si no la más grande– de un grupo empresarial en este proceso electoral. La división de la donación entre distintas empresas del holding –tal como hacen muchos grupos económicos– se hace necesaria para poder eludir la norma electoral que establece que una persona (natural o jurídica) no puede realizar donaciones que superen las 10.000 UF (poco más de \$230 millones) a un grupo de candidatos o partido.

El impacto de la inversión electoral del grupo Enersis puede ser relevante en el resultado de los comicios. Un estudio econométrico de Claudio Agostini, hecho para el Centro de Estudios Públicos (CEP) y CIEPLAN, demostró que en Chile la influencia del gasto electoral en la votación de un candidato es aún mayor que en Estados Unidos. Por eso ese aporte resulta clave para grandes compañías, como el grupo Enersis, que tienen pendientes millonarios proyectos como HidroAysén. El complejo hidroeléctrico se encuentra hace dos años a la espera de ser visado por el Consejo de Ministros y aún debe someter a tramitación su línea de transmisión, por lo que más que gasto en donaciones, se trata una inversión que vale mucho más que un par de millones de dólares.

Eso también lo saben su socia en HidroAysén, Colbún, propiedad del grupo Matte. A través de sus filiales **Colbún Transmisión S.A. y Río Tranquilo S.A.**, los Matte realizaron aportes de campaña tanto para las primarias de mayo pasado, como para las elecciones generales de noviembre. Ambas empresas tienen directorios idénticos y se reunieron el 25 de mayo, primero a las 9 de la mañana ([ver documento](#)) y luego al mediodía ([ver documento](#)), para acordar la donación reservada de hasta **\$25 millones cada una**. Las dos sociedades repitieron el trámite el 9 de septiembre. Esta vez Río Tranquilo decidió donar hasta **\$40 millones** ([ver documento](#)), mientras que Colbún Transmisión aportará hasta **\$125 millones** ([ver documento](#)) para las elecciones de presidente, senadores, diputados y hasta consejeros regionales. En total, las dos empresas autorizaron donaciones políticas que suman **\$215 millones** este año.



Bernardo Matte

Aunque los montos pueden parecer cuantiosos, no lo son tanto si se toma en cuenta las dimensiones de lo que está en juego: Hidroaysén. Según la información publicada por el diario *Pulso*, ya se han invertido US\$ 275 millones y en total Hidroaysén costará unos US\$ 4.500 millones, a lo que hay que sumar un monto similar para el desarrollo de la línea de transmisión. “Estamos pidiendo a gritos una política energética nacional”, dijo esta semana Bernardo Matte, director de Colbún, empresa que ha condicionado la construcción de Hidroaysén a un acuerdo en política energética.

Es posible que tanto el grupo Enersis como el grupo Matte hayan hecho donaciones aún mayores a través de otras empresas o filiales cuyas actas de directorio CIPER no encontró, pues investigar las donaciones electorales en Chile es como buscar una aguja en un pajar.

LUKSIC, ANGELINI Y LOS DEMÁS

Después de un largo debate, hace 10 años comenzó a regir una nueva ley que regula el financiamiento de las campañas políticas y el gasto electoral. Si bien la norma fue un avance al poner límites al gasto, entregar aportes fiscales para el financiamiento de las campañas y regular las donaciones privadas, su aporte a la transparencia fue mínimo. Al permitir donaciones de tres tipos: públicas, anónimas (sólo el administrador electoral conoce al donante) y reservadas (el nombre del donante es secreto), en la práctica lo que ha pasado es que el nombre de los financistas de la política permanecen en total anonimato.

Si bien se asume que los grandes financistas de las campañas electorales son empresas y no personas, hasta ahora había total opacidad sobre la identidad de quiénes son los donantes. CIPER obtuvo la primera pista durante la investigación a los negocios de la Universidad San Sebastián ([ver reportaje](#)),

cuando revisando las escrituras descubrimos que las sociedades que la controlan habían hecho donaciones a las anteriores elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto, gracias a que la ley obliga a que los directorios de las empresas aprueben las donaciones, las que quedan entonces en un acta que debe reducirse en escritura pública. Si bien esta rendija da luces sobre quiénes hacen las donaciones, la ley prohíbe dejar en el documento público registro de quiénes son los destinatarios de los fondos, cuando se trata de donaciones reservadas.

Para descubrir a los financistas de las campañas iniciamos un recorrido por las principales notarías de Santiago, en busca de las escrituras que contuvieran las aprobaciones de los directorios de las grandes empresas. Se trató de una búsqueda a ciegas y cuyo resultado no es exhaustivo, lo que implica que puede haber escrituras que no encontramos, directorios que aún no sesionan o actas que aún no han sido enviadas a las notarías. Además, los grupos empresariales donan a través de sus distintas sociedades, lo que facilita la elusión de los límites impuestos por la ley para cada persona jurídica. De todos modos, la búsqueda arrojó resultados relevantes para desmitificar quiénes son las empresas que financian la política.

Además de los grupos Enersis y Matte, el **grupo Luksic** acordó hacer donaciones políticas a través de su matriz **Quiñenco**. El acta de la sesión del directorio del 6 de junio pasado ([ver documento](#)), confirma que la empresa habitualmente hace aportes políticos, desde candidatos presidenciales a concejales. Para justificar las donaciones, Quiñenco apela a la transparencia, dejando en acta que “las donaciones para campañas políticas las efectuaba la compañía como una contribución a la mejor información respecto a las opciones ofrecidas, lo que sin duda beneficia a la transparencia de las mismas, siendo además, la reserva, un mecanismo que resguarda la independencia de gestión de aquellos que resulten elegidos en cada elección, quienes deberán concentrar los esfuerzos de su mandato en el interés del país”. Pese a que la mayor parte de las empresas deja en la escritura pública el monto que espera donar, Quiñenco no lo hace, y sólo lo incluye en un libro de “hechos reservados”. A la reunión asistieron los directores Nicolás Luksic Puga (hijo del fallecido Guillermo Luksic), el ex ministro de Hacienda de Pinochet Hernán Büchi, Gonzalo Menéndez, Matko Koljatic y Fernando Cañas, quien además es presidente del Metro de Santiago.



Guillermo Luksic

Al igual que los dueños de otros conglomerados, los Luksic también donan a través de sus filiales. Así al menos lo hicieron en septiembre de 2009, cuando Guillermo Luksic Craig presidió el directorio de la **Compañía de Cervecerías Unidas S.A.** donde estuvo “especialmente invitado” el asesor Hernán Büchi. Allí se decidió financiar campañas electorales de candidatos y partidos políticos de manera reservada. Un mes más tarde, Guillermo Luksic presidió una sesión similar de otras dos filiales de CCU, **Cervecera CCU Chile Limitada y Embotelladoras Chilena Unidas S.A.**, donde ambas compañías adoptaron acuerdos similares. Ninguno de los tres directorios decidió detallar el monto de las donaciones.

Otro grupo que sigue ese camino y no revela los montos, es el **grupo Angelini** a través de su empresa **Corpesca S.A.** La decisión de aportar dinero a las campañas políticas se tomó el 1 de agosto pasado en una sesión presidida por Roberto Angelini. De acuerdo al acta ([ver documento](#)), el nuevo gerente general de la compañía, Claudio Elgueta, “expuso que de acuerdo a la responsabilidad empresarial que ha mantenido la compañía con la sociedad chilena y su institucionalidad política, y en particular con nuestro sistema democrático, corresponde decidir” sobre los aportes electorales. Se precisa que el aporte es reservado y por lo tanto “no podrá divulgarse por motivo alguno la forma de distribución de

este aporte”. La precisión no está de más, considerando que en mayo pasado CIPER reveló que Corpesca aportó \$25 millones a la campaña de la diputada Marta Isasi antes de la aprobación de la Ley de Pesca, lo que gatilló la renuncia del entonces gerente Francisco Mujica ([ver reportaje](#)).



El comercio no escapa de la fiebre por las donaciones políticas. A las seis de la tarde del 2 de octubre pasado, el directorio de **Falabella Retail S.A.** inició en la tradicional casa matriz de calle Rosas una sesión que calificó de “reservada”. A ella asistieron los representantes de las dos familias controladoras. Por la rama Cúneo-Solari estuvieron Paola Cúneo, Carlos Heller Solari, Carlo Solari, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardone Solari; y por los Del Río, Carolina y José Luis del Río Goudie. Por unanimidad, los directores decidieron donar **\$80 millones** para las elecciones presidenciales y parlamentarias ([ver documento](#)). **Sodimac S.A.**, otra de las empresas del grupo, siguió el mismo camino. Unos días antes, el 24 de septiembre, se reunieron en las oficinas de calle Rosas para aprobar una donación de hasta **\$196 millones** ([ver documento](#)).

El **grupo Yarur** tampoco se quedó al margen del financiamiento de las campañas políticas. A comienzos de este año y a través de **BCI Factoring** acordó donar 1.500 UF, unos **\$34 millones**, para las elecciones primarias. El 16 de septiembre se volvieron a reunir y el directorio de BCI Factoring le dio prácticamente un cheque en blanco al presidente Diego Yarur Arrasate, al acordar “destinar la suma equivalente hasta el máximo que la normativa establece” al financiamiento de campañas, desde presidente a consejeros regionales. Como ya se mencionó, el límite es de **10.000 UF** a grupos de candidatos o partidos.

DONACIONES DISPARES

La primera elección presidencial con la nueva norma fue la de 2004-2005. En esa oportunidad, el 29% de los aportes privados de Michelle Bachelet fueron reservados, el 6% anónimo y sólo el 4% fue público. Joaquín Lavín sólo recibió aportes reservados, equivalentes al 60% de sus ingresos de campaña, mientras que Sebastián Piñera financió de su bolsillo gran parte del gasto y sólo el 7% correspondió a aportes reservado ([ver los gastos e ingresos globales](#)).

En la siguiente campaña, 2009-2010, Eduardo Frei recibió 37% de aportes reservados, 11% anónimo y menos de 2% público, mientras que Piñera obtuvo 25% de manera reservada, 17% anónimo y sólo 0,2% público. Los cálculos hechos por Agostini, revelan también que la Coalición por el Cambio recibió 4,08 veces más aportes privados que la Concertación. Dentro de la Coalición por el Cambio, la UDI obtuvo más de dos veces los aportes reservados que recibió Renovación Nacional. Le siguen la Democracia Cristiana, la que obtuvo un cuarto de lo que recibió la UDI. En términos globales, las donaciones privadas representaron 3,5 veces los aportes públicos.

Las empresas tienen un doble incentivo para financiar a los políticos. Además de buscar influencia en la toma de decisiones, las donaciones de campaña pueden descontar impuesto: se puede imputar como gasto hasta el 1% de las rentas. Gracias a eso, esta semana [el vespertino La Segunda](#) obtuvo datos globales de las donaciones privadas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII). Según dicha información, entre 2004 y 2010, las empresas solicitaron beneficios tributarios **por \$36 mil millones** gastados en donaciones políticas.

Los secretos de las empresas que financian la política (II): Mineras, banca, pesqueras y más.

Por [Francisca Miranda](#) y [Francisca Skoknic](#) en Reportajes de investigación publicado el 18 de noviembre de 2013.



En esta segunda vuelta, los comandos de Bachelet y Matthei necesitarán fondos frescos para financiar sus campañas. Pese a que la ley está diseñada para que los ciudadanos no se enteren quiénes hacen donaciones electorales, CIPER buscó y encontró nuevos nombres de conocidas empresas que invierten en financiar la política. Una de las mineras del grupo Luksic, el Banco Santander y varias de las grandes pesqueras, son algunas de las que han aprobado cuantiosos montos para estas elecciones.

La campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial se inicia hoy y con ella se extiende la necesidad de financiamiento para Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, entre quienes el próximo 15 de diciembre se definirá la próxima Presidenta de Chile. Si bien algunas empresas ya aprobaron donaciones que incluían un posible balotaje, otras deberán organizar nuevas sesiones de directorio si quieren aportar dinero en esta nueva fase. Así tendría que hacerlo, por ejemplo, Minera Los Pelambres, controlada por el grupo Luksic, que sólo se puso en el escenario de los comicios de ayer.



Resguardar “el criterio de equidad fijado por el directorio, tanto a favor de candidatos como de partidos políticos” fue la resolución de la sesión extraordinaria del directorio de Los Pelambres, el 13 de julio pasado. El acta no explica cómo opera ese “criterio de equidad”, pero la decisión parece seguir la política del fallecido patriarca Andrónico Luksic, de quien siempre se dijo que financiaba a todos los sectores. La diferencia es que hoy el financiamiento electoral está regulado y, si bien la ley está diseñada para que haya total opacidad sobre los financistas y sus destinatarios, los directorios de las empresas deben aprobar las donaciones y sus sesiones quedan en escrituras públicas.

El 6 de noviembre, CIPER publicó [el capítulo inicial de esta serie](#) en que se revelaron por primera vez las donaciones políticas de las grandes empresas, tras detectar y revisar las escrituras públicas que estas compañías dejan en diversas notarías públicas. El caso más relevante es el del grupo Enersis, cuyo directorio aprobó una donación de US\$ 2,5 millones (\$1.274 millones) a través de distintas filiales, mientras que una de éstas, Endesa Chile, aprobó financiar campañas por US\$ 1 millón (\$509

millones). A ello se suma que Colbún, la eléctrica del grupo Matte que es socia de Endesa en el proyecto Hidroaysén, aprobó donaciones por \$215 millones este año a través de dos filiales. Al dividir los aportes entre sus distintas empresas, los grupos económicos logran eludir los límites impuestos por la ley a las donaciones para campañas políticas, operando como una suerte de “multirut” electoral.

En esta segunda entrega, nuevamente descubrimos empresas cuyos directorios aprobaron donaciones que exceden los límites legales (10.000 UF o \$229 millones para grupos de candidatos o partidos políticos). En el caso de Minera Los Pelambres, el directorio acordó donar un monto “no superior” a 36.000 UF (unos US\$ 1,6 millones o \$ 825 millones) ([ver transcripción del documento](#)).

El Banco Santander también autorizó un monto sobre el tope cuando el 24 de septiembre pasado se aprobó la propuesta del presidente del directorio, Mauricio Larraín, de donar hasta 14.000 UF (cerca de \$ 320 millones) ([ver documento](#)). Para distribuir el dinero se fijó un criterio que suena tan salomónico como el de Los Pelambres, pues Larraín y el director Carlos Olivos fueron instruidos para que “velando por un razonable equilibrio fijen los aportes”. Entre los directores que aprobaron la medida estuvieron el empresario cercano al ex Presidente Ricardo Lagos, Marco Colodro; el presidente de Adimark, Roberto Méndez; la historiadora y consejera del Instituto Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, y el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

Corbo ya había participado de una decisión similar en el directorio de Endesa, pero no es el director que más donaciones ha aprobado en las actas de distintas empresas que han sido encontradas por CIPER. Es Carlos Heller, el mayor accionista de Azul Azul, quien aparece cuatro veces autorizando donaciones políticas, todas ligadas al grupo Bethia, del que es presidente. Si en el reportaje anterior aparecía en las votaciones para donar \$80 millones a través de Falabella Retail y \$196 millones a través de Sodimac S.A., ahora figura aprobando hasta \$25 millones directamente a través del grupo Bethia S.A. ([ver documento](#)). En dicha sesión de directorio, que se realizó el 3 de octubre pasado, se analizó también una donación calificada de “social” para reconstruir un parque en Pudahuel, cerca de un centro de logística del grupo, por \$ 20 millones.



Carlos Heller

Heller también estuvo presente en la reunión de directorio que el 29 de octubre realizó **Latam Airlines Group S.A.**, nacida de la fusión de Tam y Lan, empresa en la que el grupo Bethia compró la participación que tenía el Presidente Sebastián Piñera. Entre los otros directores estaba el presidente de Codelco, Gerardo Jofré, y el antiguo socio de Piñera, Juan José Cueto. Su hermano Ignacio Cueto, CEO de la compañía, fue quien solicitó la autorización para hacer donaciones electorales. Si bien la moción se aprobó, no se dejó registro en el acta del monto.

Y en el ámbito minero, además de la donación aprobada por Los Pelambres, fue posible encontrar una de Molymet, la mayor procesadora de molibdeno del mundo, una empresa en la que participa el grupo Matte junto a las familias Mustakis-Anastassiou y Pirola-Gianoli. Su directorio se reunió el viernes 13 de septiembre en la planta que la compañía tiene en la localidad de Nos para autorizar donaciones políticas por hasta \$ 50 millones. La sesión fue presidida por el ex ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Patricio Aylwin, Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, quien fue uno de los facultados, junto a George Anastassiou, para determinar a qué candidatos se efectuarían las donaciones ([ver documento](#)).

Las donaciones de las pesqueras

Si en la primera entrega identificamos a Corpesca, ligada al grupo Angelini, como donante de \$25 millones, ahora se suman otras de las tres grandes pesqueras: Camanchaca S.A., Camanchaca Pesca Sur S.A. y Blumar S.A. Entre las cuatro suman \$ 180 millones.

Camanchaca S.A. es controlada por Jorge Fernández Valdés y Francisco de Borja Cifuentes Correa, ambos también directores de la compañía. Camanchaca Pesca Sur es una de sus filiales y ahí también participa Pesquera Bío-Bío, de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks. Mientras la primera acordó donar \$ 45 millones ([ver documento](#)), su filial decidió aportar \$ 30 millones ([ver documento](#)).



Carlos Hurtado Ruiz-Tagle

Blumar S.A. nació de la fusión de Pesquera Itata y Pesquera El Golfo, propiedad de la **familia Sarquis** y del **grupo Yaconi-Santa Cruz**. En la sesión del directorio del 26 de agosto pasado se vieron en una encrucijada. En julio de 2012 habían establecido una política general para las donaciones sociales y políticas, según la cual el límite sería el 1% de las utilidades proyectadas, con un mínimo de US\$ 50 mil dólares (\$ 25 millones). Este monto se consideraría neto, es decir deduciendo los beneficios tributarios que tuviera. El problema es que para estas elecciones querían donar \$ 80 millones, lo que era superior al 1% de las utilidades proyectadas. De todos modos, el monto se aprobó por unanimidad, dejando en claro que se trataba de una situación extraordinaria ([ver documento](#)).

El financiamiento se toma la agenda

La primera revelación de CIPER sobre los montos que las empresas donan a los candidatos generó que el financiamiento y gasto electoral se transformaran en uno de los temas de la agenda política en la última semana de la campaña electoral. Evelyn Matthei disparó duramente contra Michelle Bachelet, a quien acusó de estar llegando al límite del gasto autorizado y de haber invertido cinco veces más que ella en propaganda.

Bachelet respondió que el financiamiento de su campaña es “claro y transparente. Para eso tenemos quioscos en las calles, para que el que quiera aportar pueda aportar. Hemos hecho cena de recaudación, artistas nos han regalado cuadros, esculturas que se han rematado. Nosotros lo hemos hecho de manera transparente y cuando sea el momento entregaremos todo el detalle de cuántos recursos hemos recaudado por esa vía. Eso es como hemos financiado nuestra campaña”.



Lo cierto es que hasta ahora ninguna de las dos grandes candidatas ha entregado información que permita transparentar ni los montos ni el origen del gasto de sus campañas. Sólo se sabe que Bachelet pidió un crédito de \$2.500 millones al BancoEstado. Las donaciones de las empresas son reservadas, pero a estas alturas ambas candidatas ya tienen una idea clara de cuánto recaudaron, pues el Servicio Electoral (Servel) les va transfiriendo periódicamente las donaciones.

Lo que es seguro es que en esta campaña habrá un aumento en el gasto electoral declarado por los candidatos, pues el techo autorizado aumentó en un 80% en relación a la votación de 2009. Si en esa ocasión el límite era de \$ 5.000 millones, esta vez el máximo a gastar es de \$ 9.200 millones. Los montos para los candidatos a diputados y senadores aumentaron en una magnitud parecida, dependiendo de la población de sus distritos y circunscripciones. La explicación para un incremento tan significativo es que el límite del gasto electoral se calcula de acuerdo al número de personas inscritas en el padrón y con la implementación del voto voluntario, automáticamente se registraron poco más de **5 millones** de nuevos electores, lo que engrosó la cifra.